

REPUBLICA DE COLOMBIA



**JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
Rad. 76001-58-03-010-2023-00182-00**

SENTENCIA No. T- 185

Santiago de Cali, tres (03) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Procede el despacho a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela instaurada por el señor GERMAN SIERRA PADILLA, identificado con C.C.79.860.514 contra la CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H, donde pide la protección del derecho fundamental de petición y debido proceso.

ANTECEDENTES

Mediante solicitud de amparo el señor GERMAN SIERRA PADILLA, pretende que se proteja el derecho fundamental de petición, el cual considera le está siendo vulnerado, ya que la CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H, no ha dado respuesta a la petición radicada el veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Para sustentar su solicitud, en síntesis, expone los siguientes hechos relevantes:

“... 1. El día 27 de junio de 2023, mediante apoderada judicial, elevé petición al CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H. a los correos electrónicos cartera.contb.cras@gmail.com, consejosemillero2@gmail.com, craltosdelsemillero2@gmail.com, solicitando se efectúen las reparaciones en el techo de la torre “C” del CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO, con el fin de hacer cesar las filtraciones de agua hacia el apartamento 501 de mi propiedad. 2. A la fecha han transcurrido más de 15 días, sin que el CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO dé respuesta de fondo a mi solicitud, ni ha efectuado visitas o reparaciones al apartamento 501 tendientes a solucionar los problemas de filtración en techos, los cuales son zonas comunes que no puedo intervenir, motivo por el cual, acudo al Juez de tutela para que proteja mi derecho fundamental de petición, de una forma material, real, actual, verdadera y no aparente. 3. He efectuado requerimientos verbales a la administración del Conjunto Residencial para que se realicen las labores de reparación del techo de mi apartamento, sin obtener respuesta alguna. 4. Actualmente nos encontramos en época de verano y solo hasta el día de hoy se volvieron a presentar lluvias, teniendo que padecer nuevamente las afectaciones por filtraciones de agua en mi apartamento, temiendo que vuelvan las intensas lluvias que nos afectaron en meses pasados y que lleven a agravar el estado del techo e incluso su desplome...”

COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el Art 86 de la Constitución Política de Colombia y el Art 37 del Capítulo segundo del Decreto 2591 de 1991 este Despacho es competente para asumir el trámite en primera instancia de la presente acción de tutela.

TRÁMITE

La presente acción correspondió a este Juzgado por reparto, el cual al observar la concurrencia de los requisitos mínimos exigidos en el Decreto 2591 de 1991, procedió mediante auto admisorio ordenar la notificación a CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H., para que manifestara lo que a bien tuviera sobre los hechos edificadores de la acción de tutela, concediéndole dos días para ello, y emitiendo los oficios pertinentes, mismos que fueron notificados tal como consta en los folios precedente a este fallo.

RESPUESTA ACCIONADO

CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H., emitió contestación del derecho de petición y aporta prueba de ello.

PRUEBAS QUE OBRAN EN EL PROCESO

Se allegaron al expediente dentro del trámite procesal, entre otras, las siguientes pruebas relevantes:

- ✓ Libelo de la acción de tutela.
- ✓ Contestación de la entidad accionada.
- ✓ Respuesta al derecho de petición.

PROBLEMA JURÍDICO

Se puede concretar en la siguiente pregunta:

¿Es viable tutelar el derecho de petición pretendido, toda vez que la parte accionada no ha dado respuesta clara y de fondo al derecho de petición presentado por la parte accionante?

CONSIDERACIONES

1.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo para que se amparen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la Ley (Art. 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Arts. 2° y 8° Convención Americana de los Derechos Humanos.). El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un mecanismo judicial rápido y eficaz para garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

Accionante: GERMAN SIERRA PADILLA

Accionados: CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H

RAD.: 76001430301020230018200

autoridad pública o de particulares en los casos determinados en la ley, la protección consistirá en una orden para que aquel respecto del cual se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. Los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 desarrollan el art. 86 de la Constitución; la acción de tutela sólo procede cuando el agraviado no dispone de otro medio de defensa judicial, es eminentemente subsidiaria y sólo admisible en ausencia de otros medios de defensa, excepcionalmente se autoriza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso corresponde al Despacho determinar si en efecto al accionante se le quebrantó el derecho fundamental de petición o demás derechos que sean conexos.

Para determinar sobre la procedencia de la acción de tutela en búsqueda de protección del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional de 1991, según el cual, toda persona tiene derecho a recibir pronta resolución a las peticiones que formule a las autoridades, ya en interés general o particular.

Al respecto la H. Corte Constitucional respecto de la importancia del derecho de petición como derecho fundamental, ha reglado su procedencia y efectividad, en este sentido:

*“El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder y ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.*¹ (Subrayado nuestro).

Sobre el mismo tema, en relación a la calidad de respuesta que se debe brindar al peticionario, la corte ha dicho:

*“...el derecho fundamental de petición consiste no sólo en la facultad de la persona de formular una petición respetuosa ante las autoridades, sino también en el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo. Por consiguiente, “[l]a respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición”.*²

¹ Sentencia T-511 de 2010

² Sentencia T-400 de 2008. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

“Es deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma.”³(Subrayado nuestro.)

También en reiteradas ocasiones la H. Corte Constitucional se ha pronunciado acerca del hecho superado, entendido éste como el evento en el cual han desaparecido los supuestos de hecho que motivaron la presentación de la acción de tutela.

“La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es el resarcimiento del daño causado por la vulneración del derecho fundamental.”⁴

EL CASO CONCRETO

En el presente caso se tiene que el señor GERMAN SIERRA PADILLA, solicita el amparo constitucional, porque considera que el CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H, le está trasgrediendo su derecho fundamental de petición, toda vez que no se le había dado contestación a la petición radicada.

En primera medida es necesario establecer la procedencia de la acción constitucional examinando si se presenta una vulneración al derecho fundamental de petición, por lo que observa el Despacho que de conformidad a lo expuesto por la Corte Constitucional, se establecen ciertos parámetros con los que se podría entrar a determinar si se presenta vulneración al derecho de petición, para lo cual se debe tener en cuenta que las respuestas a la petición deben ser claras, precisas

³ Sentencia T-369 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos.

⁴ Sentencia T- 358 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Accionante: GERMAN SIERRA PADILLA

Accionados: CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H

RAD.: 76001430301020230018200

y de fondo; así las cosas se observa que la entidad accionada, contestó la petición elevada por el accionante y allega prueba de ello.

Ahora bien, revisada la solicitud enmarcada en el derecho de petición y en lo pertinente a este amparo se puede extraer que lo requerido por el accionante es “...

1. Se proceda, a más tardar al 15 de julio del año en curso, a efectuar las reparaciones en el techo de la torre “C” CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO, tendientes a hacer cesar las filtraciones de agua hacia el apartamento 501 de propiedad de mi representado, so pena de dar inicio a la acción judicial procedente y el cobro de perjuicios adicionales, agencias en derecho y costas procesales. 2. En su defecto, se procesa al pago de la suma de \$3.571.458, suma de dinero que se detalla a continuación, con el fin que mi representado proceda a contratar las obras para la relación aquí solicitada, previa autorización de la copropiedad para ello: 3. Se solicita el pago del lucro cesante, por concepto de cánones de arrendamientos dejados de percibir al ser terminado el contrato de arrendamiento por encontrarse el apartamento en condiciones no habitables, perjuicio que para el mes de junio del año 2023 asciende a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$850.000), adicional a los cánones que se generen con posterioridad de no efectuarse las reparaciones. 4. En caso de no obtener respuesta de fondo a mi petición en el plazo aquí señalado, se procederá al cobro del daño moral que se le ocasiona a mi representado producto de la angustia y desatención de la copropiedad frente a la afectación por filtraciones que se genera en el inmueble de su propiedad, producto del mal estado del techo de la Torre “C” del CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO, perjuicio que se tasa en DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. 5. Se suministre copia de la póliza vigente de zonas comunes contratada por el Conjunto Residencial...”

Lo cual la entidad accionada, procedió a contestar indicando “... Séptimo_ todo tipo de reclamación ante la aseguradora de zonas comunes debe ser sustentada en el cumplimiento cabal del riesgo previsible, este en sus debidos mantenimientos periódicos para evitar el deterioro de la misma zona común, para así tener derecho a solicitar reparación o indemnización a la compañía aseguradora sobre siniestros o riesgos no previsible o de fuerza mayor. Octavo ahora bien, la situación que genera la humedad del apartamento C 503 como en la mayoría de las torres de la copropiedad es por la falta de mantenimientos preventivos en las terrazas y cubiertas que no se realizaron en años anteriores, y que además la copropiedad es conocedora de estos hechos, que incluso en los presupuestos aprobados por asamblea general de copropietarios en los años 2021 y 2022 no fue aprobado algún rubro económico para el mantenimiento de estas zonas. Noveno_ como es de conocimiento de la togada en calidad de apoderada judicial del apartamento C 503, la ley 675 de 2001 reconoce como máxima autoridad en jerarquía a la asamblea general de copropietarios, y no permite que el administrador de la copropiedad cambie el destino de lo aprobado en el presupuesto por los asambleístas. Decimo_ situación que en su debido tiempo puse en conocimiento al señor GERMAN SIERRA propietario del apartamento C 503, en las atenciones que le brinde cuando me reporto los daños que padecía el apartamento en mención, también le ilustre el déficit financiero en el que esta la copropiedad a lo que manifestó ser conocedor, y lo invite a participar en la asamblea general que se avecinaba para solicitar a los demás asambleístas aprobar y destinar un rubro para atender las cubiertas que llevaban más de tres años sin ser atendidas en su debida forma. Once_ el 18 de marzo de 2023, se realizó la asamblea general de copropietarios, y a pesar que expuse ante la asamblea la situación de las cubiertas de la copropiedad y los daños que estaban ocasionando, no fue posible que la asamblea aprobara un rubro para la atención de esta situación. y me sorprendió a

Accionante: GERMAN SIERRA PADILLA

Accionados: CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H

RAD.: 76001430301020230018200

un mas el señor GERMAN SIERRA propietario y doliente del apartamento C 503 no pronunciarse en el debido espacio y escenario donde de acuerdo a la ley 675 de 2001, es donde se toman las decisiones por las cuales se regirá la administración...”

Sentado lo anterior, resulta claro para el Despacho que la respuesta emitida por la entidad accionada, cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional frente a la respuesta del derecho de petición deprecado, por cuanto la respuesta es de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado, toda vez que se informa los pormenores del asunto y remite la documentación requerida.

Por lo mencionado, se tiene que en el presente caso se configura la carencia actual de objeto, ya que el ente accionado procedió a emitir respuesta a la Petición formulada por la parte accionante, en consecuencia, habrá de negarse la tutela solicitada por haberse superado el hecho que la producía.

Cabe aclararle al accionante que, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, **la respuesta no implica la aceptación o respuesta favorable de lo solicitado, pues como ya se dijo basta con que sea congruente a la petición y así se procedió en el presente caso.**

Por lo expuesto, el JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE SANTIAGO DE CALI, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

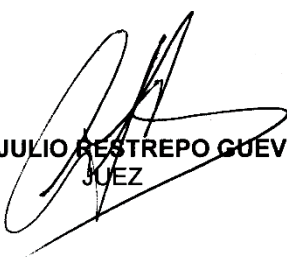
PRIMERO: NEGAR la presente acción de tutela instaurada por el señor GERMAN SIERRA PADILLA, identificado con C.C.79.860.514 contra la CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL SEMILLERO P.H., en lo concerniente al derecho fundamental de petición, **por carencia actual de objeto al superarse el hecho que la producía** y de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados del fallo de esta tutela por el medio más expedito.

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, POR SECRETARÍA **ENVIAR** el expediente al día siguiente a la Honorable Corte Constitucional par a su eventual revisión. (Artículos 31 y 33 del Decreto 2591 de 1991).

CUARTO: Una vez regrese el expediente de la posible revisión constitucional que pueda realizar nuestra Honorable Corte Constitucional, se dispone que por Secretaría proceda con su ARCHIVO.

NOTIFÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE


CARLOS JULIO RESTREPO GUEVARA
JUEZ

Rad. 010-2023-00182-00